

# AYOTZINAPA: EL OLVIDO NO ES UNA OPCIÓN

Remedios Álvarez Santos

**La brutalidad y el encono contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos tendría que ser un referente en nuestra conciencia a manera de coraza contra cualquier atisbo de olvido. Muchos somos quienes nos preguntamos por qué se asesina en México y la respuesta es cruenta: simplemente porque se puede.**

George Santayana dijo: “Aquel que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo”. El olvido es un rasgo que se le ha atribuido al *ethos* del mexicano. De ahí que este texto se proponga ser un antídoto contra la desmemoria.

De Ayotzinapa es mucho lo que han indagado<sup>1</sup> sobre todo los y las periodistas de investigación, quienes constantemente se encuentran a merced de la censura y la persecución, pues, como bien sabemos, en México los activistas, los defensores de derechos humanos y los periodistas ejercen su labor en condiciones del todo adversas. Respecto a ello, Reporteros Sin Fronteras, en su más reciente informe, indica que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y, de manera local, Veracruz se considera la zona

más peligrosa en América Latina para la prensa: tan solo de 2000 a 2016 fueron asesinados 99 periodistas y 20% de dichos asesinatos ocurrieron en ese estado (Reporteros Sin Fronteras 2017, 2).

Esto es por sí mismo relevante y, desde luego, alarmante, más aún si consideramos que muchos periodistas son cooptados por el medio para el cual laboran, el crimen organizado o el propio gobierno. Basta recordar lo sucedido a la periodista Carmen Aristegui, despedida junto con todo su equipo de la empresa MVS, por el amplio reportaje sobre lo que hoy se conoce como La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, tema que, por cierto, habían censurado de la cadena antes mencionada y que, por lo mismo, la periodista tuvo que publicar en su portal. Este suceso ha tenido una serie de represalias

laborales y penales para Aristegui, quien, cabe señalar, ha dado voz a las víctimas de Ayotzinapa. Sobre el mismo tema, es importante mencionar las serias investigaciones de Anabel Hernández y de Té-moris Grecko.

Los eventos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, escapan a toda comprensión. La brutalidad y el encono contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos tendría que ser un referente en nuestra conciencia a manera de coraza contra cualquier atisbo de olvido. Muchos somos quienes nos preguntamos por qué se asesina en México y la respuesta es cruenta: simplemente porque se puede. Corrupción e impunidad son el cáncer que ha hecho metástasis a lo largo y ancho del país. Precisamente, en el momento en el que escribo estas líneas, el INEGI dio a conocer su informe respecto a la tasa de asesinatos perpetrados en el país durante 2017: el incremento es de 27% en relación con 2016. En nuestro país, cada 18 minutos es asesinada una persona. Se cuenta con un registro de 34 000 desaparecidos y, como sabemos, desde la declarada guerra contra el narco durante el periodo presidencial de Felipe Calderón al 2017, se con-



*Mi tormento*

tabilizan más de doscientos treinta y cuatro mil asesinatos. ¿Cómo obviar esto?

Siempre hemos escuchado decir que el ser humano se acostumbra a todo, y la normalización de la violencia es algo que se advierte cada vez más en nuestra sociedad. Es como si fuésemos parte de una de esas series de narcos que gozan de gran popularidad. El drama de esta funesta analogía es que la pérdida de realidad, tal como lo señaló el gran filósofo y sociólogo Jean Baudrillard, es lo característico de nuestra época. La ficción ha sustituido a la realidad y por ello vivimos inmersos en una hiperrea-

lidad, donde la imagen se impone al acontecimiento, el cual queda del todo olvidado.

Pero regresando al caso emblemático de Ayotzinapa, un cúmulo de preguntas siguen sin respuesta. Lo que de primera mano se informó en los medios es que algunos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa estaban desaparecidos. La primera versión fue que la policía municipal de Iguala, Cocutla y Huitzucos había bloqueado el acceso a la plaza pública de Iguala, donde Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, estaba rindiendo su informe como di-

rectora del DIF municipal, pues supuestamente los estudiantes tenían como objetivo interrumpir dicha participación. Enseguida, se confirmó que los normalistas acostumbraban asistir a las manifestaciones del 2 de octubre en la CDMX; para ello, tomaban autobuses sin permiso de las autoridades y salían a las calles para recaudar dinero y trasladarse a la capital.

Esa noche del 26 de septiembre de 2014, cuando se iniciaron las detonaciones de arma de fuego dirigidas a los autobuses donde iban los estudiantes, también se disparó contra un autobús en el que viajaban jóvenes integrantes

del equipo de fútbol Los Avispones, y como consecuencia de ello un joven falleció. En el cruce de balas también murieron el conductor del autobús y una mujer que viajaba en un taxi. Un estudiante de la Normal, Aldo Gutiérrez Solano, de 19 años, resultó herido en la cabeza y hasta el día de hoy permanece en estado vegetativo, pues perdió dos terceras partes de la masa cerebral. Horas después, ya el día 27, fueron asesinados a tiros Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava. El caso de Julio César Mondragón causó un gran impacto, debido a que fue torturado hasta la muerte y, por macabro que sea hay que decirlo, su rostro fue desollado. Esto último fue desmentido por la CNDH, en cuyo informe se señala que Julio César murió a raíz de un traumatismo craneoencefálico y que posteriormente la fauna hizo lo propio con su rostro; sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), organismo adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó que sí se usó un arma punzocortante para tal efecto, sin descartar que horas después de ese brutal acto la fauna local haya intervenido.

Persiste un cúmulo de preguntas: ¿Dónde están los jóvenes normalistas? ¿Qué pasó a lo largo de esos dos días y los subsecuentes? ¿Por qué prácticamente este suceso se ha convertido en secreto de Estado? ¿Cuál es la verdad detrás de toda esta tragedia nacional? La certeza de la mentira es lo que sí podemos advertir. El discurso oficial ha estado permeado de engaños. La actitud de los funcionarios a cargo de la investigación ha sido insensible ante los padres y madres de los estudiantes y en general hacia toda la sociedad. Del todo ilustrativo es que Enrique Peña Nieto nunca fue a Ayotzinapa para hablar con los

**Son muchos los eventos que circunscriben este drama social que estamos viviendo. Me atrevo a decir que México era uno antes de Ayotzinapa y otro, después. De manera brutal nos hicimos conscientes de la descomposición de nuestro tejido social.**

padres de los estudiantes y en un infortunado discurso osó enviarles el mensaje: “¡Ya supérenlo!”. A esto se suma que la PGR no quiso en primera instancia atraer el caso, pues aseguraba que era competencia del gobierno estatal. Posteriormente, no tuvo otra alternativa y abrió la carpeta de investigación correspondiente, estando a cargo de la PGR Jesús Murillo Karam, quien articuló de manera pública el discurso que, según él, daba cuenta de la “verdad histórica”, asegurando que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados por el crimen organizado (Guerreros Unidos) en el basurero de Cocula. Esa tesis fue desmentida por el GIEI pues, entre otras cosas, no se registró durante esos días ningún incendio de la magnitud que se requería para tan aciaga acción; además de que ni el material ni la cantidad del mismo correspondía a lo que según Murillo Karam se utilizó. Esta versión la siguen sosteniendo las autoridades correspondientes, descalificando con ello la pericia del GIEI, así como la del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF), quienes gozan de un prestigio internacional. Por cierto, cabe señalar la insistencia del Estado en

descalificar todo informe que revele lo que se pretende ocultar. Basta recordar cómo se desmintió al relator especial de la ONU para los casos de tortura, Juan Méndez, cuando presentó el informe en el que demostraba que la tortura era una práctica generalizada en México. Curiosamente, el gobierno mexicano hizo la invitación al experto en derechos humanos para que realizara un análisis pero, como era de esperarse, lo que informó causó resquemor y se canceló la segunda visita programada del relator.

El Estado mexicano, particularmente durante este último sexenio, ha mostrado una sintomatología esquizofrénica, pues por un lado extiende invitación a expertos en la defensa de los derechos humanos y por el otro les obstaculiza la investigación. De igual manera, ratifica los tratados de derechos humanos y, paradójicamente, es modelo de la violación de 44 de “58 derechos humanos plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nueve tratados internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)” (Buscaglia 2014, 19-20).

Como sabemos, para poder transitar de la idea a la realidad o de la teoría a la praxis, se requiere de ese *topoi* tan desgastado en el discurso de Estado: “voluntad política”. El Estado gasta cantidades descomunales en servicios de asesoría o consultoría de expertos en materia de seguridad nacional y humana, pero no acata las recomendaciones. Imagen y simulación. Son muchos los elementos que coinciden con el análisis de Buscaglia en cuanto a que México es un Estado fallido, como resultado de los vacíos de poder, y esa vacuidad ha sido cubierta por la colusión entre políticos, empresarios y crimen organizado. Claro, alguien podría objetar que

no es así, pues ahí están las instituciones que muestran que el Estado está presente y robustecido, pero asumámoslo, la mayoría de nuestras instituciones “funcionan” por inercia, tal cual lo expresa Lipovetsky en su texto *La era del vacío*.

Recuperando el hilo conductor, cuando se realizó la investigación en el basurero de Cocula, cerca de ahí, en el Río San Juan, se encontraron varias bolsas negras con cenizas y, casualmente, en una de ellas se halló un hueso. La información arrojada a raíz de las pruebas realizadas en el laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria, reveló que la estructura ósea encontrada era compatible con el ADN de uno de los normalistas, Alexander Mora Venancio. Por cierto, los médicos forenses afirmaron que aquel día, cuando se llevó a cabo el hallazgo, ellos no estuvieron presentes debido a que simplemente no se les avisó. Lo anterior, como era de esperarse, suscitó una serie de cuestionamientos: por ejemplo, ¿de dónde se pudo obtener ese resto humano, el único encontrado en la zona antes mencionada?

Posteriormente, gracias a la grabación de dos periodistas de un medio independiente se pudo comprobar que Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), sacó de prisión a uno de los supuestos responsables de la desaparición de los jóvenes y lo llevó al basurero de Cocula, donde aquel narró cómo se suscitaron los eventos. Todo esto ocurrió sin que de ello quedara registro en la carpeta de investigación. Se podría aseverar que es un universo de mentiras lo que rodea la pesquisa. Son varias las líneas que señalaron los integrantes del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero una de ellas es



Chon

la que más ha impactado: un quinto autobús, en el cual se presume que había heroína. La investigación realizada por Anabel Hernández y Steve Fisher, auspiciada por la Universidad de Berkeley, ha sido nodal para comprender y, al mismo tiempo, disolver la “mentira histórica”.<sup>2</sup> Ambos aseguran que Guerrero es el epicentro del tráfico de droga a Estados Unidos y van más lejos aún al sostener que las fuerzas castrenses tienen pleno conocimiento y control del tráfico de estupefacientes. Esta hipótesis resultaba a tal grado verosímil que era necesario desaparecer a quienes pudieron haber sido tes-

tigos de eso. Las autoridades informaron que ese quinto autobús fue totalmente destruido y que lo mismo ocurrió con las grabaciones obtenidas de las casetas de cuota, eliminando con ello la mayor evidencia posible.

Por fortuna, los padres y madres de los estudiantes, así como parte de la sociedad civil, no han claudicado en la exigencia de verdad al Estado. Hasta el día de hoy se puede decir que el gobierno es responsable, por lo menos de omisión, en todo este drama. Hoy existe la plena certeza de que participaron agentes de la policía (municipal, estatal, federal) y mi-

litares. Por lo anterior, este caso ha sido tipificado por los defensores de derechos humanos como crimen de lesa humanidad.

La esperanza resurge, pues el 1 de junio del año en curso sucedió algo inédito en la procuración de justicia de México: el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoeno Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados Juan Antonio Trejo Espinoza, Mauricio Fernández de la Mora (ponente) y Héctor Gálvez Sánchez, resolvió –atendiendo tres amparos interpuestos por prisioneros acusados de participar en la desaparición de los normalistas, quienes aseguran que sus declaraciones se obtuvieron bajo tortura– crear una comisión de investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala). Sin embargo, aunque esta sentencia es inapelable, la reacción del Estado no se hizo esperar. De manera inmediata, los 32 fiscales de la República, en conferencia de prensa, reprobaron el proceder del Tribunal. La segunda andanada fue aún más lejos, pues el poder ejecutivo, interpuso 100 recursos legales para tratar de contravenir la resolución de los magistrados. ¿Qué está en juego para que el ejecutivo pretenda blindarse de esa manera? ¿Por qué esa oleada de “solidaridad” institucional con el poder del Estado y no así con las víctimas? Otra lastimera respuesta: porque en México la justicia no es un derecho, sino un mecanismo de control social. Es una dádiva de la que gozan unos cuantos, pues se debe tener presente que solo el 1% de los delitos son resueltos. En este, nuestro roto México, se inhala y respira violencia de los tres tipos que analiza Žižek en su texto

*Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales: física, simbólica o lingüística y sistémica.*

Son muchos los eventos que circunscriben este drama social que estamos viviendo. Me atrevo a decir que México era uno antes de Ayotzinapa y otro, después. De manera brutal nos hicimos conscientes de la descomposición de nuestro tejido social. Salimos a la calle a manifestar nuestra indignación por este oprobio; la cólera, la impotencia, el desconsuelo por no saber dónde estaban los estudiantes. Han pasado casi cuatro años y, tristemente, muchos han olvidado y mostrado indolencia; incluso, recién ocurrido este acontecimiento, algunos alumnos de la Universidad Veracruzana se oponían a suspender clases a manera de contraprotesta y se escuchaban expresiones como esta: “¡A mí, los estudiantes de Ayotzinapa me valen madre!” Pero hay más: algunos profesores de nuestra alma máter se refieren a los normalistas como “Ayotzinacos” y, por si esto no fuera ya trágico, algunos alumnos aplauden hilarantes tal muestra de “agudo ingenio”.

Por razones obvias, debemos preguntarnos en qué tipo de sociedad nos hemos convertido. Y de esta manera lo expreso: en una muy enferma. Una atmósfera muy tóxica es la que se respira. Ante esto, no se puede dejar de sentir un inmenso dolor, una opresión que podría anular todo atisbo de esperanza. ¿Cómo consentir que en nuestro espacio universitario haya conductas como estas? ¿En manos de quién está la edificación espiritual de los futuros profesionistas, que tendría que fungir como antídoto para prevenir la situación de violencia en la que nos encontramos inmersos, cuando

al interior del mismo sistema está presente?

El pasado mes de julio los estudiantes de Ayotzinapa se habrían graduado. El mensaje es claro: no pienses, no disientas, no cuestiones, sé invisible y sin voz pero sobre todo, ten miedo. Esta es la clave para que, como exclamó Étienne de La Boétie, se construya de manera muy eficiente la servidumbre voluntaria, haciendo del temor el mejor de los hábitos. Sin embargo, los estudiantes de Ayotzinapa, a manera de una máquina que transporta la voz de La Boétie, nos dicen: “Atrévase a dejar de servir y serán libres”. **LPyH**

#### REFERENCIAS

- Buscaglia, Edgardo. 2014. *Vacíos de poder en México. Cómo combatir la delincuencia organizada*. México: Debate.
- Reporteros Sin Fronteras. 2017. “RSF publica su informe ‘Veracruz: los periodistas frente al Estado de miedo’”. Acceso el 18 de septiembre de 2018. <https://rsf.org/es/noticias/rsf-publica-su-informe-veracruz-los-periodistas-frente-al-estado-de-miedo>.

#### NOTAS

- <sup>1</sup> Importante es mencionar la plataforma creada por artistas en Inglaterra, apoyados en la investigación realizada por el GIEI, en la cual puede observar en tiempo real lo que sucedió a lo largo de esos dos días. Ver: [plataforma-ayotzinapa.org](http://plataforma-ayotzinapa.org)
- <sup>2</sup> Esta información se encuentra vertida en varias publicaciones de la revista *Proceso*.

**Remedios Álvarez Santos** es académica de la Facultad de Filosofía de la UV. Es doctora en Filosofía por la UNAM y autora de los libros *Hermenéutica analógica y ética* y *Lectura de Nietzsche desde la hermenéutica analógica*.